**RV: EXPEDIENTE: 68001-31-03-009-2019-00116-01 (Rad. Interno 928/2023)
SUSTENTACION SE SUSTENTA RECURSO APELACION SENTENCIA DE FECHA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2023 PROVENIENTE DEL JUZGADO 9CTO**

Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Santander - Bucaramanga
<seccivilbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 15/12/2023 15:17

Para: Despacho 03 Sala Civil Familia Tribunal Superior - Santander - Bucaramanga

<des03scftsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Juan Felipe Mantilla Rondon <jmantilro@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Maria Paula Roa Cordero

<mroac@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: gloria perez mantilla <gloriperez2010@hotmail.com>

Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 14:59

Para: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Santander - Bucaramanga

<seccivilbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; gloria perez mantilla <gloriperez2010@hotmail.com>;

gerencia11@hotmail.com <gerencia11@hotmail.com>; miguelandersonbeltran@gmail.com

<miguelandersonbeltran@gmail.com>; miguelanderonabogado@gmail.com

<miguelanderonabogado@gmail.com>; presidenciarealsantander@gmail.com

<presidenciarealsantander@gmail.com>; sebasmonsalva10@gmail.com

<sebasmonsalva10@gmail.com>; mauriciosantos3@yahoo.com <mauriciosantos3@yahoo.com>;

sandragerencia11@hotmail.com <sandragerencia11@hotmail.com>

Asunto: EXPEDIENTE: 68001-31-03-009-2019-00116-01 (Rad. Interno 928/2023) SUSTENTACION SE
SUSTENTA RECURSO APELACION SENTENCIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
PROVENIENTE DEL JUZGADO 9CTO

Bucaramanga, 15 de diciembre de 2023

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA

Att. Magistrada Sustanciadora **XIMENA ORDOÑEZ BARBOSA**

E. S. D.

**REERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA INSTAURADO
POR ALDIA S.A.S CONTRA UNION TEMPORAL SS BUCARAMANGA NIT. 900.885.161
INTEGRADA POR JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES Y ROBERO ENRIQUE
RODRIGUEZ RUIZ; JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES en virtud de la solidaridad
que se desprende como integrante de las uniones temporales y como suscriptor del pagaré
base de recaudo; ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ en virtud de la solidaridad que se
desprende como integrante de las uniones temporales y como suscriptor del pagaré base de
recaudo Y UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINSTRATIVO 2015 INEGGRADO POR
JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, MAURICIO ALBERTO SANTOS REY Y
ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ.**

RADICACION: 68001-31-03-009-2019-00116-01 (Rad. Interno 928/2023)

SENTENCIA SOBRE LA CUAL RECAE RECURSO DE APELACION Y REPAROS: LA EMITIDA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

CAPITULO I

DEL RECURSO DE APELACION Y SU ALCANCE

GLORIA PEREZ MANTILLA, mujer, mayor de edad, vecina de Bucaramanga, abogada en ejercicio, portadora de la T.P Número 82.480 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada de la sociedad **ALDIA S.A.S** me permito adicionar sustentación recurso de apelación contra la sentencia que fuera emitida por su Despacho el día **15 de Noviembre de 2023**, la cual resolvió: **PRIMERO:** DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR EL DAMANADOS SEÑOR MAURICIO ALBERTO SANTOS REY DENOMINADAS: 1)NO SER EL DEMANDADO QUIEN SUSCRIBIO EL TITULO 2) LAS FUNDADAS EN LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL TITULO Y QUE LA LEY NO LAS SUPLA EXPRESAMENTE 3)FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA 4) INCAPACIDAD DEL DEMANDADO EN SUSCRIBIR EL TITULO 5)FALTA DE REPRESNETACIÓN O DEPODER BASTANTE DE QUIEN HAYA SUSCRITO EL PAGARÉ A NOMBRE DELDEMANDADO; **6)ALTERACION DEL TITULO SIN PERJUICIO DE LO DESPUETO DE LOS SIGNATARIOS POSTERIORES A LA ALTERACIÓN;** 7) LA DE ESTAR SIENDO EJECUTADO POR MAS DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA UNION TEMPORAL SS POR LAS RAZONES EXPUESTAS; **SEGUNDO:** DECLARAR PROBADAS PARCIALMENTE LAS EXCEPCIONES FALTA DE CAUSA ONEROSA Y PAGO DE LO DEBIDO CONFORME A LA PARTE MOTIVA; **TERCERO:** COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR MODIFICAR EL MANDAMIENTO DE PAGO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019 EN EL SIGUIENTE SENTIDO:

“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE ALDIA S.A.S Y A CARGO DE LOS DEMANDADOS JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES Y ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ COMO INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015 POR LAS SIGUIENTES SUMAS DE DINERO:

PRIMERO; POR LA SUMA de OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESO MCTE (\$82.303.841) CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CAPITAL respectivo a la obligación asumida por esa UNION TEMPORAL y contenido parcialmente en el pagaré número 12010 de fecha 10 de noviembre de 2018

SEGUNDO: POR EL VALOR DE LOS INTERESES DE PLAZO correspondiente a ese capital a la tasa del 1.0115% incluido iva por el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2016 al 10 de Noviembre de 2018

TERCERO: Por LOS INTERSES MORATORIOS liquidados sobre el capital descrito en el numeral 1 primero desde el 11 de Noviembre de 2018 hasta el pago total de la obligación.

LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE ALDIA S.A.S Y A CARGO DE LOS SEÑORES JESUS PEDRO NEL SARRANO MENESES Y MAURICIO ALBERTO SANTOS REY como integrantes de la UNION TEMPORAL SS BUCARAMANGA por las siguientes sumas de dinero:

PRIMERO: POR LA SUMA DE: CIEN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$100.980.740) *Con respecto al valor del capital por las obligaciones asumidas por esa UNION TEMPORAL y contenidas parcialmente en el pagaré número 12010 de fecha 10 de noviembre de 2018*

SEGUNDO: por el valor de los intereses de plazo correspondientes a ese capital a una tasa De 1.0115% incluido Iva por el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2015 a 10 de noviembre de 2018.

TERCERO: POR LOS INTERESES moratorios liquidados sobre la cantidad descrita en el numeral 1 a la tasa legal permitida por la superintendencia financiera sobre el capital descrito en el numeral segundo desde el 11 de noviembre 2018 hasta el pago total de la obligación.

TERCERO: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION CONFORME SE DISPUSO CON LA MODIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO como se dispuso en esta providencia conforme al ordinal anterior.

CUARTO: ORDENAR el avalúo y remate de aquellos bienes embargados o se llegaren a embargar en el presente proceso previa las formalidades de ley, para que con el producto se pague el crédito y las costas

QUINTO: Requerir a las partes para que presenten la liquidación del crédito conforme a lo dispones en el artículo 424 del código general del proceso.

SEXTO. CONDENAR EN COSTAS a los señores JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES Y ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ como integrantes de LA UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015 y a los señores JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES Y MAURIDIO ALBERTO SANTOS REY como integrantes de la UNION TEMPORAL SS BUCARAMANGA.

Respecto al demandado MAURICIO ALBERTO SANTOS REY, se establece una reducción en costas en un 50% por haber prosperado parcialmente dos excepciones tasesen por secretaria.

SEPTIMO:FIJAR COMO AGENCIAS EN DERECHO LA SUMA DE 9.000.000,00

OCTAVO: CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA, procede recurso de apelación....

NOVENO: Ejecutoriada la presente sentencia reingrese el expediente para la liquidación de costas y la remisión a los Juzgados de ejecución.

La cual fue objeto de aclaración en el sentido que se excluye la unión temporal y se deja establecido que la vinculación de los señores ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ Y JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES no sólo lo hacen como integrantes de las uniones temporales demandadas sino también como suscriptores del pagaré base de recaudo.

Conforme a lo anterior, el recurso de apelación recae sobre los numerales de segundo, tercero, sexto en lo atinente a la rebaja de las costas procesales en un 50% para el señor MAURICIO ALBERTO SANTOS REY, de la providencia emitida por el Despacho el día 15 de Noviembre de 2023 a efectos que se revoque lo resuelto por el Despacho en los mencionados numerales y en su reemplazo se ordene la improsperidad de la totalidad de las excepciones propuestas por el señor MAURICIO ALBERTO SANTOS REY e igualmente se mantenga la mandamiento de pago en los términos emitidos el 10 de junio de 2018 en su integridad es decir que no se excluya las uniones temporales y consecuentemente se deje sin efecto la rebaja en la condena en costas, pedimento este que se respalda en los siguientes capítulo y argumentos que a continuación se señala:

CAPITULO III

DE LA FIJACION DEL LITIGIO

En la oportunidad procesal se fijo el litigio en los siguientes términos: ¿ Si era procedente determinar si conforme al titulo valor presentado que sustenta el proceso ejecutivo se cumplía todos los requisitos para ordenar seguir adelante la ejecución o si por el contrario se configuraba alguno de los hechos que dan sustento a las excepciones para modificación el mandamiento de pago o denegar el mismo frente a el demandado **MAURICIO ALBERTO SANTOS REY?**

CAPITULO IV

DE LAS CONSIDERACIONES DEL DESPACHO AL MOMENTO DE RESOLVER DE FONDO TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA FIJACION DEL LITIGIO.

Problemas jurídicos que fueron resueltos por el Despacho que si era procedente ordenar la ejecución contra el demandado MAURICIO ALBERTO SANTOS REY y contra todos los demandados pero con una modificación frente al mandamiento de pago y declara probada parcialmente la prosperidad de las excepciones falta de causa onerosa y cobro de lo no debido y para ello tuvo como consideraciones:

1. Determina que existe legitimación en la causa por activa y por pasiva conforme a lo establecido en los artículos 782, 783 y 781 del código general del proceso y que ALDIA S.A.S, ostenta la legitimación para demandar al señor **MAURICIO ALBERTO SANTOS REY.**

2. El título base de la ejecución el número 12010 con fecha de exigibilidad 10 de Noviembre de 2018 reúne los requisitos conforme al código de comercio.
3. Con respecto a las uniones temporales con fundamento en los artículo 6 y 7 de la ley 80 de 1993 estos tienen capacidad para ser parte señalando que esta regla no puede extenderse al a los campos del código civil y del comercio y que debido a falta de regulación cada uno de los intervinientes deben comparecer de forma independiente y por tanto no es dable extenderse que la demanda se haga a través del representante de dichos consorcios determinando que no era dable seguir continuar con la ejecución directamente frente a las uniones temporales siendo la primera modificación que debe hacerse frente al mandamiento de pago.
4. Frente a la solidaridad, la corte suprema de justicia ha indicado Las fuentes obligaciones solidarias son la convención la cual se puede establecer activa ó pasiva, para que esta exista s e hace necesario que esta exista por medio de una convención.
5. En el documento que contiene la unión temporal EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015 en el documento de su conformación se indica en la clausula segunda, la responsabilidad será solidaria y mancomunada de todas las obligaciones derivadas del contrato y por la ejecución del mismo de acuerdo a lo antes mencionado conforme al artículo 825 del Código cuando fueren varios los deudores se presumirá la solidaridad y en el mismo sentido el artículo 632 del código comercio y por tanto se debe tener LAS UNIONES TEMPORALES junto con los integrantes son suscriptores del pagaré base de la ejecución como solidarios en el pago de la obligación.
6. En el caso de la intervención del señor MAURICIO ALBERTO SANTOS REY, que aunque si bien es cierto si este no firmo directamente el pagaré, se debe determinar si a este se aplica la solidaridad indicada, determinando cualquier integrante de los integrantes de consorcio ó unión temporal puede obligarse ante terceros con cualquier acto o contrato que se realice en la medida que se trate de obligaciones solidarias, en primer lugar pues, el estatuto estatal no establece que solo con respecto al contrato, e igualmente se tiene que el pagaré tiene su causa obligaciones que se derivan de las uniones temporales, y por tanto si le asiste obligación en el pago.
7. Con respecto a las excepciones de mérito Señalo que los demandados **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES Y LUIS ROBERTO RODRIGUEZ RUIZ**, no contestaron la demanda y no propusieron excepciones, estos se encuentran dentro de lo previsto en el artículo 442 del código general del proceso para que se ordene continuar la ejecución frente a ellos, el señor **MAURICIO ALBERTO SANTOS REY** propuso como excepciones **NO SER EL DEMANDADO EL QUE SUSCRIBIO EL TITULO, LAS FUNDADAS OMISION DE LOS REQUISITOS DEL TITULO QUE LA LEY DEBA SUPLIR EXPRESAMENTE, LAS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA** por parte del señor **MAURICIO ALBERTO SANTOS REY**, determinó, que el señor **MAURICIO ALBERTO SANTOS REY**, está legitimado en la causa para responder en forma solidaria y mancomunada por las obligaciones contraídas por la **UNION TEMPORAL SS BUCARAMANGA**, y el hecho que no haya suscrito el pagaré no lo exonera pues, este se encuentra vinculado como integrante de la **UNION TEMPORAL S.S BUCARAMANGA** en el marco de la constitución y por tanto no es posible determinarse que no este obligado a responder y por tanto estas excepciones se declara su improsperidad, y frente a las excepciones de incapacidad del demandado de suscribir el título, sobre el particular las uniones temporales los representantes están facultados para adquirir obligaciones afines al objeto, en el acta de constitución clausula quinta se autoriza al señor **“JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES y allí se autoriza al mismo para contratar,**

comprometer y representar a la unión temporal” y con esta facultades adquirió los materiales de construcción y se comprometió con ALDIA S.A.S a pagar los insumos en el plazo indicado en el pagaré ejecutado, por tanto esta excepción esta llamada al fracaso; con respecto a la excepción de falta de poder bastante de quien haya suscrito el pagaré a nombre del demandado, pues no se faculto al representante legal para que obligue a los integrantes frente a tercero, que tan solo frente al Municipio de Bucaramanga, al respecto el Despacho considero que si estaba facultado para adquirir materiales de construcción, comprometer y pagar conforme se estableció en la cláusula quinta y por tanto ese acto se encuentra cubierto en lo señalado en el documento del consorcio clausula quinta y por tanto no es dable su prosperidad pues para el desarrollo de la actividad estatal debe desarrollar obligaciones de naturaleza civil, laboral, pues, se requiere de actividades comercial como es el caso de suministro de materiales de construcción y con respecto a la excepción de alteración del texto del titulo sin perjuicio de lo dispuesto respecto de signatarios posteriores a la alteración, pues, no se desglosaron las obligaciones de cada una de las unidades temporales, el pagaré fue diligenciado conforme a la carta de instrucciones la cual fue suscrita no solo por las personas naturales, sino también por los representantes de las uniones temporales, se advierte que no existía obligación de fraccionar dichas obligaciones, estudiando esta excepción con la excepción falta de causa onerosa y cobro de lo debido, frente a estas tres excepciones:

A) La vinculación del demandado obedece a su calidad de integrante de la Unión temporal SS Bucaramanga.

B) Si bien en principio tanto en el encabezado del pagaré como en la carta de instrucciones, no se autorizó para discriminar cada una de las obligaciones,

c) De la copia informal de las facturas se evidencia un relación entre la demandante y los demandados.

Luego no puede acreditarse que el titulo valor base de la ejecución no corresponda a esa relación comercial y por tanto no se establece la inexistencia de causa onerosa, el hecho que el ejecutado no haya recibido el material de forma directa no lo exonera del cumplimiento de la obligación cambiaria adeudada, el hecho de ser parte integrante de ese consorcio y dentro del desarrollo de esa obra se requiere de los materiales no es posible predicar la inexistencia de causa onerosa, estas excepciones prosperan parcialmente por las siguientes razones:

1. Las uniones temporales se constituyeron por personas diferentes, con diferentes objetos contractuales diferentes, con entidades publicas diferentes tal y como se desprende de los documentos y de lo señalado por el demandado JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES.

2. El representante Legal de ALDIA S.A.S, junto con el señor JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, señalan la misma realidad negocial.

3. La testigo HILDA CORREA, señalo que se elaboró un mismo pagaré pues existe un mismo representante y se mantenía una relación comercial que antes del diligenciamiento del pagaré se consolida el valor de capital de las uniones temporales en el año 2017 y como solicitaron plazo para el pago se diligencio el pagaré en el año 2018 y que posteriormente se liquidan los intereses, conforme a los extractos que esta allego, se tiene que los valores adeudados por concepto de capital se tiene que la

*unión temporal **EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015** adeuda la suma de: **\$82.303.841** y la **UNION TEMPORAL S.S BUCARAMANGA**, adeuda la suma de: \$100.980.740, las cuales sumadas efectivamente arrojan el capital inmerso en el pagaré por concepto de capital: \$183.284.581*

Conforme a lo anterior, se tiene que el señor **MAURICIO ALBERTO SANTOS REY** ostenta solidaridad sobre a la obligación contenida en el pagare por ser integrante de la **UT SS BUCARAMANGA**, si le asiste razón en el sentido que no es dable en la forma emitida mediante providencia de fecha 10 de junio de 2019 pues, allí se libró el cobro sobre el importe total, sin diferenciar lo que le corresponde cubrir a cada de las UT demandadas, y por tanto prospera parcialmente la excepción de falta de causa onerosa y cobro de lo no debido si bien es cierto no se logra derrumbar el titulo valor, el valor por el cual se lleno el pagaré corresponde a lo adeudado, pero el mandamiento de pago habrá de modificarse conforme a lo anotado **EL CUAL QUEDARÁ ASI SE SIGUE LA EJECUCION CONTRA EL SEÑOR MAURICIO ALBERTO SANTOS REY por el monto de las obligaciones de las UNION TEMPORAL SS BUCARAMANGA y frente a la ultima excepción en la que se pretende que debe ejecutarse el señor MAURICIO ALBERTO SANTOS REY, únicamente por el porcentaje de participación que corresponde al 5% lo cual el Despacho determino la inviabilidad de esta excepción pues, lo inmerso en el pagaré no corresponde a sanción alguna y al ser obligación solidaria esta no se condiciona a porcentajes o la situación de no haber obtenido utilidad.**

Por las razones anteriores se modificara el mandamiento de pago frente al señor MAURICIO ALBERTO SANTOS REY y frente a los señores JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES Y ROBERTO ENRIQUE RDRIGUEZ RUIZ, se continuara la ejecución. E igualmente se ordenara el avaluo y remate de los bienes y se condenara en costas.

y frente a lo señalado en la carta de instrucciones no solo firmaron la personas naturales sino también las uniones temporales

1. artículo 782 y 783 se encuentra radicada frente al tenedor, frente al 781 del código general del proceso

se excluye de la ejecución a las UNIONES TEMPORALES S.S BUCARAMANGA Y UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015 e igualmente

CAPITULO V

Considera esta profesional del Derecho que ha de mantenerse el mandamiento de pago en los términos proferido el 10 de junio de 2019 en el sentido que no hay lugar a excluir frente al mandamiento de pago las uniones temporales SS BUCARAMANGA Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015, pues, frente a ello no se hizo reparo alguno por parte de los sujetos procesales, e igualmente no se interpuso recurso alguno sobre el mandamiento de pago en dicho sentido, adicionalmente la exclusión de estas uniones no hicieron parte de los problemas jurídicos que enmarcan la fijación del litigio, por tanto no hay lugar a la exclusión

de estas, exclusión que a más de que robasa los limites procesales que tenia el juez para su respectivo vulneran el principio de la congruencia de la sentencia, pues, el marco del Juez, se encuentra circunscrito entre el escrito de demanda, las excepciones propuestas, la replica de las excepciones y la fijación del litigio.

No obstante lo anterior, se hace necesario señalar que punto en el presente caso no es si las Uniones Temporales EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015 y SS BUCARAMANGA son personas jurídicas ó no, se sabe que este tipo de asociación atípica no es persona jurídica, y que en nuestro ordenamiento jurídico aunque no son persona jurídica, no por ello carecen de capacidad para ser parte y para obligarse, al respecto tanto el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han señalado que los consorcios y uniones temporales pueden comparecer via procesal bien sea como accionante o como demandadas, circunstancia que se encuentra aplicándose desde la sentencia de unificación proferida por el 25 de septiembre de 2013 por la mencionada Corporación., pues, no es lógico que la Unión temporal cualquiera que sea, tributariamente tiene un Nit, y por ende la facturación o suministro se lleva a cabo bajo ese Nit. , la cual es sujeto tributario, luego si es sujeto tributario no se entiende como es que no tenga capacidad para comparecer en un trámite administrativo o judicial, pues, ¿cómo hace el debate de una eventual descontento con la entidad tributaria?, e igualmente la unión temporal puede adquirir la calidad de empleador; y en el evento que si uno de los empleados que estén en obra presenta inconvenientes para el acceso a la seguridad social es a la unión temporal la que le corresponde hacer los respectivos reclamos, hacer el pago, hacer planillas; y en caso que no se ha oida esa unión temporal puede hacer uso de calidad de accionante, e igualmente se advierte que las uniones temporales tienen una connotación similar a los patrimonios autónomos, que aunque no son personas jurídicas pueden comparecer al juicio, obligarse, y de sus convenciones, actos juridicos se desprenden obligaciones. .

E Igualmente se advierte que no es coherente que una Unión Temporal tiene capacidad y es sujeto obligacional para presentar la oferta, para notificarse de la providencia que adjudica el contrato, para firmar el contrato, para cobrar, para interponer recursos para la liquidación, para contratar personal, para tributar, para reclamar, para ordenar que la facturación salga a su nombre, para objetar el contenido de la factura, para aperturar cuentas, para recibir el dinero, para firmar actas parciales, para realizar la cesión del contrato , pero no para pagar los materiales de construcciones que hicieron que fuera posible la ejecución y materialización de la obra que es objeto de cobro ante la entidad territorial.

Además, una cosa es que los integrantes sean solidarios de todos lo que se desprenda de la ejecución del contrato y otra cosa es que no deba integrarse la unión temporal al proceso, pues, precisamente en la ejecución del contrato se requiere el suministro de material de construcción y para que dicho material sea tenido como costo ante la Dian la facturación debe llevarse a cabo a nombre de la unión temporal que es responsable tributario, y por ser responsable tributario reporta la información exógena al igual ALDIA S.A.S, hizo el respectivo reporte de información y sobre la facturación ni la existencia del titulo, no ofrecieron reparo alguno por el representante principal y por el representante suplente hoy apelante a titulo personal, además tributariamente las uniones temporales y los consorcios conforme el artículo 368 del E.T es agente retenedor y conforme el artículo 437 es responsable del impuesto de renta cuando de forma directa ejerce una actividad grabada, conforme a lo preceptuado en de la artículo 20 de la ley 1819 de 2016, que curioso puede retener y para ello esta habilitado por la ley , pero para el pago que le lleva a cabo la retención no tiene capacidad para el pago.

Al respecto, el Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación de 25 de septiembre de 2013, Expediente N.º 19.993, señaló : “Si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas -comoquiera que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los procedimientos administrativos de selección contractual como de los propios contratos estatales-, también se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal respectivo -legitimatío ad processum-, por intermedio de su representante. (...)” (Subraya fuera del texto Original) Así mismo, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, le atribuyó a los Consorcios la capacidad para celebrar contratos con las entidades estatales. En relación con dicha disposición la Corte Constitucional, en Sentencia C-414 de 1994, sostuvo: “Se ha discutido en la doctrina sobre la identidad jurídica de las uniones temporales y los consorcios, y a éstos últimos se los suele asimilar a la figura del "joint venture" del derecho americano o al "paternish" de los ingleses, y no pocos al de una sociedad de hecho por las informalidades que rodean su organización jurídica. “En nuestro régimen legal, la capacidad es la aptitud que se tiene para ser sujeto de relaciones jurídicas, es decir, para realizar sin el ministerio de otra persona, actos con efectos válidos en la esfera del derecho, y si bien esa habilitación se vincula con la noción de persona, hasta el punto que toda persona, en principio, es capaz, salvo lo que en contrario disponga la ley, no es requisito necesario ser persona para disponer de capacidad jurídica. (...) Con relativa frecuencia en el derecho tributario se encuentran sujetos que no encuadran con exactitud en la noción de persona, y sin embargo pueden ser responsables de obligaciones tributarias. Es así como la ley eleva a la condición de sujetos pasivos de una obligación tributaria a ciertos "entes" colectivos sin personería jurídica o masas de bienes, como las sucesiones ilíquidas, las sociedades de hecho, la comunidad organizada y los consorcios, entre otros. “La identificación de los sujetos tributarios, en los casos señalados, surge por razón de los fines de sus actividades, objetivamente consideradas y de la relativa autonomía funcional con que operan. La ausencia de personería, por lo mismo, no supone una dificultad para identificar a estos sujetos especiales pasivos del tributo. (...) De los contenidos de la ley 80 resultan confirmadas las aseveraciones precedentes. El artículo 6o. autoriza para contratar con las entidades estatales a "... las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes". De igual modo señala que, "también podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales". “En estos eventos el Estatuto no se refiere a una persona y sin embargo permite que los consorcios y a las uniones temporales puedan contratar con el Estado, lo cual, en resumen significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que no les exige como condición de su ejercicio, la de ser personas morales. (...) El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica. (...) “Se tiene de lo anterior que según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.” De conformidad con lo anterior, la personalidad jurídica no es exigida, en el ordenamiento jurídico colombiano, como un requisito absoluto, sine qua non, para el ejercicio de las acciones judiciales o, lo que a la postre es lo mismo, para actuar válidamente en los procesos, ora en

calidad de demandante ora de demandado o, incluso, como tercero interviniente, según cada caso. Así las cosas, los Consorcios son titulares de derechos fundamentales como el debido proceso y, en consecuencia, se encuentran legitimados para ejercer la acción de tutela en procura de su efectiva protección cuando resulte amenazado o conculcado frente a actuaciones judiciales o administrativas, dimensiones en las que, con idéntico rigor, se impone la estricta observancia del aludido derecho fundamental, en todos los aspectos que según la Constitución, la jurisprudencia y la doctrina involucra y conlleva.

La anterior sentencia de unificación fue objeto de adición mediante Sentencia de Unificación Consejo de Estado Sentencia de 25 de septiembre de 2019 que al respecto indicó:

CAPACIDAD PARA SER PARTE DE MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE MIEMBROS DEL CONSORCIO / REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL “Ahora, a pesar de que es claro que la posición unificada permite que los miembros de un consorcio o unión temporal comparezcan por sí mismos a un proceso judicial, estima el despacho que en aquellos eventos en los que es necesaria o indispensable la comparecencia de una unión temporal o consorcio, por regla general, basta con que se haga parte en el proceso el representante designado por estas para dar cumplimiento a la debida integración de la litis, pues de lo contrario se perdería el efecto práctico de la postura asumida en providencia de unificación..”

“En este punto es importante destacar que el consorcio no es una persona jurídica y, por esa razón, aunque tiene capacidad procesal para comparecer como sujeto en los procesos judiciales en los cuales se debaten asuntos relacionados con los derechos o intereses de los que es titular, ello no desplaza a los miembros que lo conforman, quienes, en todo caso, son los vinculados al proceso por ser quienes ostentan la calidad de personas, solo que, según la providencia que viene de citarse, pueden actuar de manera colectiva a través del representante de la asociación o de forma individual e independiente, siempre que se cumplan las reglas para que los demás integrantes puedan actuar en defensa de sus intereses, si así corresponde...”

2.1.8 La jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia puso de presente, desde hace varios lustros, que la capacidad para comparecer en juicio no se encuentra, en modo alguno, supeditada al requisito de la personalidad jurídica, tal como lo evidencian los pronunciamientos consignados en el fallo emitido por su Sala Plena, en agosto 23 de 1984, oportunidad en el cual sostuvo: 5 “2°).

Que las funciones de ejecución administrativa y de representación en juicio no están supeditadas a la circunstancia de que los entes respectivos sean personas jurídicas. (Se deja resaltado). “3°). - Que la personalidad jurídica, así como la personería jurídica o de representación y para comparecer en juicio, son de mera estirpe legal pero no de rango constitucional y pueden por tanto ser modificadas por ley sin violar la constitución. (...) “4. - Y siendo la ley y no de Constitución la determinación de la personalidad jurídica, así como de ley es la facultad de modificar la ley y lo que por ésta se puede hacer, según lo previsto en el artículo 76-1 de la Carta, en la resulta se tiene que la mera circunstancia de que por norma con fuerza legal se invista a la Procuraduría de capacidad o aptitud para disponer del Presupuesto Nacional asignado al Ministerio Público, sin ser aquella persona jurídica, no depende sino del legislador; nadie se lo prohíbe, ni siquiera la Constitución ... “Ante lo cual, atendidas las amplias facultades otorgadas al legislador extraordinario, según lo examinado atrás, era de su resorte, al reorganizar la Procuraduría, otorgar las funciones señaladas de ordenación del gasto, de contratación y de colaboración en la tarea de ejecución presupuestal, de que tratan los tres preceptos demandados, sin parar mientes en que la Procuraduría o el Ministerio Público sean o

no personas jurídicas de derecho público, cosa que sólo atañe a la ley, acaso también a la técnica y a la estética, pero que no interfiere con la Constitución”

Las anteriores consideraciones y directrices fueron reafirmadas por esa misma Corporación, a través de las sentencias proferidas en febrero 28 de 1985⁴⁶ y en mayo 29 de 1990⁴⁷. A la luz de la normativa procesal que regula, de manera especial, el actuar de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, resulta más claro, aunque la exigencia de la personalidad jurídica no constituye requisito indispensable para asumir la calidad de parte dentro de un determinado proceso o para actuar dentro del mismo. Téngase presente que la norma legal en cita condiciona la posibilidad de que las entidades públicas y privadas puedan obrar como demandantes, como demandadas o como intervinientes, en los procesos contencioso administrativos, al cumplimiento de funciones públicas por parte de las mismas, mas no a la exigencia de que cuenten con personalidad jurídica independiente. Y acerca de la capacidad para contratar, la Corte Constitucional⁵² ha sostenido: “La capacidad para contratar. “La capacidad es la aptitud y la posibilidad de intervenir como sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Dicha capacidad, comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e igualmente la facultad de actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos dichos derechos. Una especie concreta de aquella la constituye la capacidad para contratar. “La ley 80 de 1993 reguló tanto la capacidad de los sujetos públicos como la capacidad o competencia de los sujetos privados que intervienen en las relaciones jurídicas a que dan lugar los contratos estatales.

En tal virtud, estableció que están habilitadas para celebrar contratos con las entidades estatales las personas incapaces, las cuales, según el régimen de la contratación estatal, son quienes se catalogan como tales conforme a la ley civil o comercial u otros estatutos, e igualmente las que están incursas en causales de inhabilidad o de incompatibilidad. “Con respecto a la capacidad o competencia de los sujetos públicos, la referida ley señaló cuáles eran las entidades estatales, con personería jurídica, y 6 los organismos o dependencias del Estado a los cuales se autoriza para celebrar contratos, obviamente en este último caso con referencia al respectivo sujeto de Como resulta apenas natural, ha de entenderse también que la representación del consorcio o de la unión temporal, en los términos de la ley, para todos los efectos, comprenderá por igual las actuaciones procesales que deban emprenderse o desplegarse con el propósito de reclamar o defender en juicio los derechos derivados de las actividades negociales de esa forma asociativa de colaboración empresarial. Es más, resulta bastante contradictorio que ante un proceso ante la Jurisdicción contenciosa administrativa LAS UNIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015 Y SS BUCARAMAGNA, tienen capacidad de parte, pero no sucede lo mismo ante la jurisdicción ordinaria, donde le están cobrando parte de los materiales de construcción que no canceló para ser posible las diferentes obras que ya cobró en el caso de la union temporal SS Bucaramanga y que olvido pagar el importe del material y que el contrato que esta suspendido pero que se encuentra en cabeza del UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015 y que se encuentra cautelado en el presente proceso , sería como aceptar que los principios y valores son un metro de caucho que se adaptan al momento y a la necesidad. Se reitera que es contradictorio e inadmisiblesuponer que el representante de las UNIONES TEMPORALES CITADAS puede celebrar el contratos, convenir su liquidación, adelantar trámites ante la Dian, recibir el anticipo, constituir polizas, aperturar cuentas de ahorros o corrientes las cuales son necesarias para el pago, pues, todo costo para que sea deducible para cualquier debe ser bancarizado, obtener el Nit., ser sujeto tributario; ser empleador, afiliar personal ante el sistema de seguridad social; afiliar el personal ante el ICBF, cumplir las cargas y ser sujeto pasivo de cobro coactivo, celebrar encargo

fiduciario para manejo de anticipos, abrir cuentas de ahorros y cuentas corrientes, solicitar suministro de materiales de construcción, exigir que la facturación se haga a nombre de la unión temporal, hacer salvedades acerca del contenido de las facturas electrónicas, facturar frente a la entidad estatal, pasar cuentas de cobro ante la entidad, notificarse válidamente de los actos administrativos contractuales e incluso recurrirlos en sede administrativa, pero que una vez agotada la vía gubernativa no pudiese demandar esos actos o el contrato mismo ante el juez competente o formular demandas en relación con las salvedades consignadas en el acta de liquidación final e igualmente defenderse de una demanda, mejor dicho si jurídicamente podía controvertir el contenido de las facturas que respaldan el suministro con mas veras puede defenderse judicialmente del cobro de las mismas.. Ahora bien, si las uniones temporales pueden adelantar proyectos constructivos, solicitar crédito constructor, legalizar propiedad horizontal y ser propietarios inscritos tanto de bienes muebles como los sujetos de registro, **mal podría indicarse que no es posible la persecución de los mismos** sencillamente por que los únicos demandables son los integrantes por la solidaridad que se desprende del contrato de unión temporal , además pensar que la unión temporal su existencia sólo depende de lo preceptuado en la ley 80 de 1993 constituye un yerro, pues, fácilmente en el escenario del derecho privado es dable la constitución de una unión temporal pues esta es una forma de las formas de colaboración empresarial , además, las uniones temporales objeto de discusión fueron para atender la ejecución de obra pbulica, la posición del DESPACHO **al excluirlas no es posible en principio que la entidad territorial** como el caso EMPAS una vez se active el contrato ponga a disposición de dinero en especial la de la **UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDO y QUE LA CAUTELA EN EL PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRA PLENAMENTE CONSUMADA y es la unica garantia en mediano plazo para su pago,**, pues, LA ENTIDAD TERRITORIAL HARA LOS PAGOS BANCARIZADOS a las union temporal, pues, recuerdese que esta tiene Nit. y le es posible aperturar cuentas de ahorro y corriente y por tanto la cuenta donde se le hará el pago se encuentra a nombre de la union temporal y no de los intervinientes, y como lo señale que la sentencia invocada en el escrito de demanda fue objeto de adición y la cual se determino: ""PRIMERO: UNIFICAR la Jurisprudencia en relación con la capacidad procesal que legalmente les asiste a los consorcios y a las uniones temporales para comparecer como sujetos –en condición de partes, terceros interesados o litisconsortes– en los procesos judiciales en los cuales se debatan asuntos relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares o que discuten o que de alguna otra manera les conciernen con ocasión o por causa de la actividad contractual de las entidades estatales "" y el suministro del material fue con ocasión de la actividad contractual y constituye un insumo para que sea posible la materialización del objeto contractual y gracias a ello el contratista puede cobrar, precisamente por que se facilita ese insumo

De otro lado conforme el ARTÍCULO 11 del código general del proceso se tiene que al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias, a más el articulo 12 establece que cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de

los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial.

Conforme a lo señalado el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA al momento de examinar el presupuesto procesal frente a las UNIONES TEMPORALES EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015 Y SS BUCARAMANGA tengan en cuenta que estas pueden perfectamente ser sujetos procesales y obligacionales sin importar si son personas jurídicas ó no , por lo tanto no es válido lo ordenado de oficio por parte del Despacho en sentencia de fecha 15 de Noviembre de 2023 que las excluyo vulnerando el derecho sustancial de ALDIA S.A.S y el principio de congruencia

De otro lado el DESPACHO NO TUVO EN CUENTA La literalidad del titulo base de recaudo y lo indicado en la carta de instrucciones, pues, conforme a lo señalado en la carta de instrucciones se tiene que los suscriptores del pagaré base de recaudo entre si se avalan de todas las obligaciones contenidas en ella, es decir que no hay lugar a su fraccionamiento, y la ley no prohíbe a las uniones temporales ser aval, fiadora de otra unión temporal y maxime por el volumen del consumo del material que se utilizaron y que ALDIA S.A.S, suministro se le confirieron descuentos como si fueran para depositos, a más de ello El pagaré base de la ejecución y la carta de instrucciones fué debidamente suscrito por: UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015, JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES Y ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ y UNION TEMPORAL SS BUCARAMANGA, je JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, La carta de instrucciones fue debidamente suscrita por: UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015, JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES Y ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ y UNION TEMPORAL SS BUCARAMANGA, JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, y quienes establecieron que conforme a lo previsto en el articulo 622 del código de comercio , autorizaron a ALDIA S.A.S para: - De forma irrevocable para llenar y convertir en titulo valor el pagaré a la orden número 12010 que garantiza los eventos y diferente negocios derivados de la relación comercial que se sostiene con la sociedad ALDIA S.A.S y cualquier servicio que ALDIA S.A.S, presta al público y que estuvieren respaldados en facturas, notas debito, notas crédito, ordenes de salida, ordenes de despacho o que conste en títulos ejecutivo, títulos valores de cualquier especie según fuere el caso, servicios estos que serian cancelados a plazo conforme consta en los diferentes documentos donde conste contabilizado el servicio prestado por parte de ALDIA S.A.

E igualmente autorizaron a ALDIA S.A.S para el llenado del pagaré en caso de mora o incumplimiento de una o mas de las obligaciones **“a mi cargo o a nuestro cargo y a favor de ustedes, derivados de la relación comercial antes señalada que puedan constar en cualquier titulo valor en lo que firme como aceptantes, suscriptores, giradores o en cualquier documento en donde conste haber recibido mercancías, por tanto de la literalidad emerge que el pagaré se lleno conforme a la carta de instrucciones y que cada unión temporal junto con sus integrantes se garantizaban entre si, y por tanto así este acreditado el monto facturado a cada una de ellas no es dable el fraccionamiento, pues, es romper la solidaridad en materia de los titulos valores.”**

Adicionalmente los deudores autorizaron a ALDIA S.A.S, para que llenare el pagaré en eventos tales como: a) Cuando se haya producido el vencimiento del plazo de cualquiera de las

obligaciones contraídas . b) Por mora en uno más de los plazos convenidos . c) Si son demandados judicialmente o embargados por cualquier clase de proceso. -Con respecto a la fecha de vencimiento del pagaré número 12010 será aquella en la cual se llene el título . -Con respecto a la cuantía señalaron: Que la cuantía será igual al monto total de las sumas que conjunta o individualmente estemos adeudando por concepto de capital, intereses, gastos, honorarios, timbre o cualquier otro concepto en la fecha de vencimiento del título sin importar su naturaleza u origen. 2.2.4 El pagaré base de la ejecución es un pagaré que su validez es implícita habida cuenta que este llena los requisitos del título valor tanto generales como especiales que prevén los artículos 621, 622 y 709 del código de comercio, pues, el título valor fue llenado conforme a las instrucciones del suscriptor e igualmente este deriva su eficacia de la puesta en firma y en este caso la firma la puso el representante legal de cada una de las uniones temporales y sobre las facultades dadas por la UNION TEMPORAL SS se tiene que no hubo salvedad por el excepcionante hoy recurrente y de su entrega con la intención de hacerlo negociable.

Los demandados firmaron el título base de la ejecución sin hacer salvedad alguna luego las UNIONES TEMPORALES EDIFICIO ADMINSTRATIO 2015 Y SS BUCARAMANGA se obligaron solidariamente y garante la una de la otra.

Además conforme a la carta de instrucciones la causa del título base de la ejecución, es el suministro de materiales de construcción y para el efecto los demandados indicaron que dicho suministro se hiciera a cada unión temporal, y la emisión de esta fue aceptada no solo extrajudicialmente sino también en el interrogatorio de parte, a más el hecho que la facturación causa del importe base de la ejecución no estuviere a nombre de los integrantes de las diferentes uniones temporales y demás suscriptores, Al excepcionante no le es dable argüir que al no existir contraprestación directa no es obligado, pues, basta con mirar lo indicado en la carta de instrucciones al igual que en el cuerpo del pagaré para darse cuenta que el pagaré base de la ejecución garantiza las obligaciones conjunta o individualmente considerada por los diferentes suscriptores del pagaré base de la ejecución y uno de los suscriptores es la UNION TEMPORAL S.S del la cual hace parte, a más el valor del importe del pagaré es el resultante de la sumatoria de los diferentes facturas insolutas, más los intereses de plazo solicitados por los intervinientes, que hoy uno de ellos se encuentra alegando una serie de circunstancias para no honrar sus obligaciones, OLVIDANDO, que conforme a lo previsto en el artículo 639 del Código de comercio: "" Cuando una parte, a sabiendas, suscriba un título sin que exista contraprestación cambiaria a las obligaciones que adquiere, las partes en cuyo favor aquella prestó su firma quedarán obligadas para con el suscriptor por lo que éste pague y no podrán ejercitar contra él las acciones derivadas del título. En ningún caso el suscriptor de que trata el inciso anterior, podrá oponer la excepción de falta de causa onerosa contra cualquier tenedor del instrumento que haya dado por este una contraprestación, aunque tal hecho sea conocido por el adquirente al tiempo de recibir el instrumento. ..."" Además se repite conforme el Art. 625. C.Co- Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título-valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación. Cuando el título se halle en poder de persona distinta del suscriptor se presumirá tal entrega.

Conforme a lo anterior, la orden de apremio de fecha 10 de junio de 2019 debe mantenerse incólume en tanto a los obligados como en el monto en que se ordeno y no como se señalo en la providencia objeto de alzada, y por tanto estos numerales deben revocarse en su integridad y declarar la improsperidad de la totalidad de las excepciones propuestas y

consecuencialmente no es procedente la rebaja de la liquidación de costas frente al señor MAURICIO ALBERTO SANTOS REY, argumento que se refuerza en sentencia emitida por el Ponente IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ NÚMERO DE PROCESO : 57957 NÚMERO DE PROVIDENCIA : SL676-2021 PROCEDENCIA : Tribunal Superior Sala de Descongestión Laboral de Bogotá CLASE DE ACTUACIÓN : RECURSO DE CASACIÓN TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA FECHA : 10/02/2021 DECISIÓN : CASA PARCIALMENTE / FALLO DE INSTANCIA - REVOCA PARCIALMENTE ACTA n.º : 5 FUENTE FORMAL : Código de Procedimiento Civil art. 44 y 177 / Ley 80 de 1993 art. 7 / Código Sustantivo del Trabajo art. 22 y 24 / Decreto 2663 de 1950 / Decreto 3743 de 1950 / Ley 141 de 1961 al señalar:

" «[...] podría contra argumentarse que los consorcios y uniones temporales no pueden ser titulares de los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales subordinadas, dado que al no ser personas jurídicas no se cumple lo previsto en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual el contrato de trabajo es “aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración”; sin embargo, a juicio de la Sala ello no es así. Lo anterior porque la interpretación de tal disposición no puede desconocer que aquellas figuras jurídicas de consorcios y uniones temporales no existían en el ordenamiento jurídico cuando se expidió el Código Sustantivo del Trabajo en el cual se inserta (Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente por la Ley 141 de 1961). La cuestión social de esa época difiere de lo que ocurre en la actualidad, pues desde la expedición de aquella norma han ocurrido importantes transformaciones jurídicas, sociales, tecnológicas y productivas. Hoy existen nuevos sujetos y organizaciones empresariales que actúan como verdaderos empleadores, pese a que no encajan en los conceptos que fundaron las leyes sociales que regularon las formas de trabajo a mitad del siglo XX. Y tal es el caso, sin duda, de los consorcios y uniones temporales, los cuales bajo una lectura estrictamente gramatical del citado artículo 22 no serían empleadores, pese a que en la práctica pueden ejercer un poder de dirección y control del trabajo. Es precisamente en estos eventos en los que el criterio de identidad normativa es insuficiente para determinar el alcance y sentido de una disposición jurídica. En esa dirección, no puede olvidarse que la Sala ha establecido que el derecho del trabajo y de la seguridad social “se construye sobre realidades y verdades” (CSJ SL4360-2019). Así, no solo la ley sustantiva del trabajo no puede permanecer inmutable ante los cambios constantes del mundo del trabajo, sino que la jurisprudencia no puede permitir la desposesión de la titularidad de los derechos laborales

En los términos señalados se deja sustentado el recurso de apelación interpuesto el día 15 de Noviembre de 2023 .

Del presente escrito se envia simultáneamente a los demás sujetos procesales a las direcciones electronicas que aparecen en el expediente en cumplimiento a lo previsto en el articulo 78 numeral 14 del código general del proceso.

Atentamente,

GLORIA PEREZ MANTILLA

C.C 63.367.557 Expedida en Bucaramanga

T.P Número 82.480 del Consejo Superior de la Judicatura.

Dirección electrónica: gloriperezm2010@hotmail.com